

LA VÍA LIBERAL/ España debería mirarse en el espejo de Portugal para poner en marcha una política de choque para evitar la salida de profesionales cualificados que se ha acelerado después de la pandemia.

La urgencia de frenar la fuga de talento en una economía envejecida

ANÁLISIS

Ricardo T. Lucas

El ambicioso plan del Gobierno de Portugal para retener al talento joven y frenar la salida de profesionales cualificados hacia otros países con mercados laborales más dinámicos contrasta con el conformismo de nuestro Ejecutivo ante una dinámica migratoria que debilita la competitividad futura de nuestra economía y amenaza la sostenibilidad del Estado de bienestar.

Mientras Portugal ultima la aprobación de un régimen fiscal específico para los menores de 35 años (gracias al que no pagarán IRPF en su primer año de trabajo, disfrutarían de una exención del 75% entre el segundo y el cuarto año, del 50% entre el quinto y el séptimo año, y del 25% del octavo al décimo), el Ejecutivo del PSOE y Sumar mantiene al otro lado de la frontera ibérica como medidas estrella para los jóvenes un bono único de 400 euros para gastar en cultura para quienes cumplen 18 años, una pequeña ayuda al alquiler y los viajes gratuitos en transporte público.

Aunque la dimensión del éxodo de jóvenes profesionales que sufre la economía portuguesa, donde dos tercios de quienes abandonan el país tiene menos de 35 años, es mucho mayor al que vive España —aquí suponen un 33% de los emigrantes a otros países—, lo cierto es que resulta paradójico que una economía como la nuestra, con un grave problema de vacantes laboral que las empresas no son capaces de cubrir (150.000 según el INE, el doble que hace una década), se permita perder a tantos jóvenes cualificados cada año e insista en sustituirlos con un creciente porcentaje de trabajadores foráneos.

El presidente del Gobierno defendió el pasado miércoles en el debate monográfico parlamentario sobre inmigración la necesidad de seguir incorporando grandes volúmenes de inmigrantes para asegurar la sostenibilidad del Estado de bienestar y el crecimiento de la economía. Lo que no dijo es que nuestro país capta principalmente profesionales que se dedican a tareas de bajo valor añadido y por las que habi-

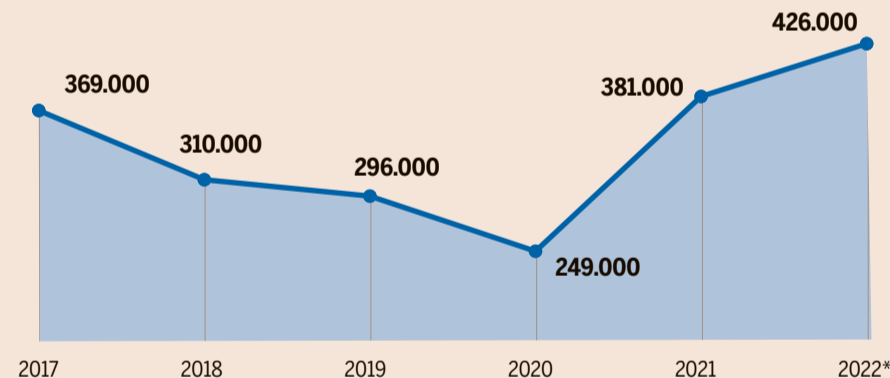


Teresa Ribera, ministra para el Reto Demográfico, junto a Diana Morant, de Ciencia y Universidades.

EMIGRACIÓN EN ASCENSO

Residentes en España que emigran al extranjero.

*Cifra preliminar.



Expansión

Fuente: INE

tualmente perciben retribuciones cercanas al salario mínimo, lo que limita su contribución a las arcas públicas en forma de cotizaciones a la Seguridad Social. Mientras economías punteras como Estados Unidos, Reino Unido y los países de Europa del Este despliegan estrategias transversales para captar o retener el talento especializado, sobre todo para profesionales vinculados con el desarrollo de tecnologías punteras como la inteligencia artificial o los desarrollos energéticos, nuestro Gobierno mantiene un enfoque desfasado en el que prioriza el volumen de nuevos trabajadores por encima de su capacitación individual.

La marcha de jóvenes profesionales añade un problema a los numerosos que arrastra

La salida de jóvenes profesionales agrava la falta de relevo generacional en sectores clave

el mercado laboral: la falta de un relevo generacional ordenado en sectores clave de la economía. La población activa mayor de 55 años se ha incrementado un 63% en los últimos diez años, además de concentrarse en actividades como la industria, que ha ido perdiendo peso de forma progresiva en el PIB.

Sin resultados

Uno de los handicaps para retener talento de nuestro país es la inseguridad jurídica. Los cambios reiterados en el mar-

co legal aplicable para los profesionales más cualificados o el personal técnico y científico frenan a quienes desearían realizar sus carreras en España. La estabilidad normativa y los mayores salarios que ofrecen otros países llevan, por el contrario, a que muchos acaben marchándose.

A la falta de un régimen fiscal atractivo y a la incertidumbre de una financiación pública sometida a los vaivenes políticos se unen otros problemas denunciados recurrentemente por los profesionales como la alta temporalidad de los contratos de investigación que se ofrecen en nuestro país, el excesivo peso de la investigación pública sobre las iniciativas privadas o la falta de promoción interna. Los sindicatos del ámbito científico re-

La importancia de la estabilidad familiar para los investigadores

Uno de los factores que las encuestas recogen como más valorados por el personal investigador a la hora de decidir dónde desarrollar sus carreras es la posibilidad de ofrecer a sus familias un entorno estable. Los impuestos que deben pagar estos profesionales y los beneficios sociales a los que pueden acogerse tienen una importancia capital. Pero la mayoría de los gobiernos europeos están centrando las ayudas públicas en la población inmigrante y con escasos recursos, orillando a las familias de renta media. Sánchez ha prometido vincular la política migratoria con las ayudas a las familias para generar un mayor arraigo de profesionales llegados del exterior, pero las asociaciones de familias numerosas denuncian que reducirá los fondos y beneficios destinados a este colectivo. Por contra, en Hungría Viktor Orbán siguió el camino contrario, bajando impuestos a las familias con más hijos, prolongando las bajas laborales de las madres hasta los tres años y vinculando las ayudas para vivienda al número de hijos. El resultado ha sido frenar la emigración y disparar la natalidad.

claman cambios estructurales como reformular los criterios a la hora de asignar las plazas de profesores universitarios para dar más peso a la labor investigadora, reducir la burocracia para validar proyectos y conceder financiación pública o incentivar el regreso de quienes emigraron. El Gobierno actual aprobó en junio de 2022 un plan para retener el talento científico con el objetivo de movilizar 3.000 millones de euros, pero por ahora no ha ofrecido un balance detallado de sus resultados.

Starmer busca reforzar su perfil y recibe hoy a 300 inversores

Artur Zanón. Londres

El primer ministro británico, sir Keir Starmer, tiene hoy su gran prueba de fuego para certificar el perfil “proempresa” y de ortodoxia económica del que hace gala. Este lunes se reunirá con unas 300 compañías que actualizarán o desvelarán sus planes inversores en el país, que sumarán decenas de miles de millones de euros y que, a juicio de Downing Street, son la base para impulsar un crecimiento económico que este año se quedará en torno al 1,1%. Entre los participantes, figuran Iberdrola, Macquarie, Orsted, Barclays, Phoenix, Schroeders, HSBC y Octopus.

La UK Global Investment Summit es una cita anual que ha cobrado especial importancia en esta edición. Primero, por el relevo en Downing Street, donde los torios han dado paso a los laboristas, tradicionalmente más reacios al mundo empresarial. El Gobierno ha presentado una reforma laboral que otorgará más derechos de los empleados desde el primer día, aunque entrará en vigor en 2026. Además, coincide con los 100 días del Ejecutivo, cumplidos el sábado, con un Starmer hundido en su valoración.

Los laboristas apuntan que la cita, en la que también detallarán su estrategia industrial y energética, entre otras, debe mostrar que el país “vuelve a estar abierto a las empresas de nuevo” y quiere hacer válida su “reputación como una de las economías más abiertas del mundo”.

La filosofía de Starmer es sencilla: si el PIB no crece, los servicios públicos no pueden mejorar, como tampoco el nivel de vida de la población. Pero con una deuda en el 100% y el compromiso de recortar el déficit, o sea, con un Estado sin músculo inversor, los laboristas reconocen que será crucial la intervención de la iniciativa privada.

Más allá de posibles colaboraciones público-privadas que puedan desarrollarse en el futuro, el Gobierno cree que su papel radica, al menos en una primera etapa, en facilitar y catalizar las inversiones del sector privado. ¿Cómo? Clarificando la legislación. Un ejemplo son las renovables, donde el titular de Energía, Ed Miliband, ha apostado por recortar obstáculos administrativos.